

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA REFORMA DEL SECTOR DEFENSA

Después de esclarecer exhaustivamente la responsabilidad de los militares y fuerzas del orden en la angustiosa tarde y noche del 20 de abril, el país tiene que ocuparse de manera urgente en las reformas de las estructuras militares y de la defensa. Esto no tiene que ver con otra cosa sino con la reforma política del Estado. De modo que el tema debe ser incorporado ineludiblemente al amplio debate iniciado en la sociedad con este propósito. En la década pasada varios proyectos de reforma del Estado se ensayaron, sin que ninguno de ellos haya incluido a las fuerzas armadas, a la Policía, al sector defensa y seguridad en su conjunto.

La prensa en estos días ha difundido el temor de que estas reformas se harán puertas adentro en la institución militar. Algo así como ocurrió en 2002 con el Libro Blanco de la Defensa que no reformó nada. Incluso algunos militares han dicho que poco tiene que ver la sociedad civil con este proceso. ¡Nada más equivocado! La reforma militar es una reforma política y por tanto le compete primordialmente a los ciudadanos. ¿Por qué? En primer lugar porque tiene que ver con el señalamiento en la Constitución y en las leyes pertinentes del papel específico que corresponde a la fuerza militar. Esta no puede ser por definición la garante del orden jurídico en el Estado de derecho. En segundo lugar, tiene que ver con el posicionamiento de la fuerza como no deliberante y subordinada al poder civil, a través de sus instituciones. Debemos cambiar sustancialmente no solo los conceptos jurídico-políticos sino también la mentalidad militarista proveniente de una cultura autoritaria que ha llegado incluso a legitimar el arbitraje militar como un mecanismo más de sucesión política. En el núcleo de esta cultura autoritaria está la famosa doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría que permanece en nuestro país tal cual desde los años sesenta, plasmada en la Ley de Seguridad Nacional todavía vigente.

Los siete puntos expuestos por el Ministro de Defensa podrían realmente reducirse a dos:

CONTENIDO

EDITORIAL LA SOCIEDAD CIVIL Y LA REFORMA DEL SECTOR DEFENSA	PAG. 1
EL CORPORATIVISMO MILITAR <i>José Castro Sotomayor</i>	PAG. 2
ALCANCE RESTRINGIDO DEL LIBRO BLANCO DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR <i>Pablo Celi</i>	PAG. 3
CRONOLOGÍA SOCIEDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA. Mayo-Junio de 2005	PAG. 4
CÚPULA DE LA FUERZA PÚBLICA	PAG. 7
GASTO MILITAR MUNDIAL Y REGIONAL ESTIMADO, 1995-2004	PAG. 8

1. Una reforma jurídico política, que debe incluir: cambios en la Constitución que lleven a la profesionalización de las fuerzas armadas; modernización y actualización de la Ley Orgánica y la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, con sus correspondientes reglamentos. Una Ley especial debe crear el Ministerio civil de la defensa para que el Ministro sea el representante político del Ejecutivo frente a las fuerzas armadas y desarrolle administrativamente este espacio tan importante, según las normas de la administración pública y no según los arbitrios de los jefes militares. La misma Ley orgánica debe crear una instancia militar (antes de la Guerra Fría solía llamarse Jefatura de Estado Mayor) subordinada al Ministro de Defensa, que se encargue del planeamiento de la defensa de acuerdo con las directrices emanadas del gobierno y que sea en la realidad, y no solo en el papel, la responsable operativa y no política, por la puesta en práctica de planes y proyectos específicos y sus requerimientos presupuestarios. Una Ley de Linea-

mientos de la Defensa Nacional que surja también del debate civil, debe reemplazar a la obsoleta Ley de Seguridad Nacional. Así los ecuatorianos podremos estar seguros de cómo, en qué circunstancias y en qué condiciones, empleamos nuestras fuerzas militares. No queremos seguir en la incertidumbre ni en la sospecha de que intereses de otras potencias pueden usarlas a espaldas de nuestras convicciones y necesidades.

2. Una reforma técnica militar, que debe encaminarse al rediseño de las Fuerzas militares para colocarlas de acuerdo con las necesidades de la defensa y de la organización militar en el mundo actual. Esta y solo esta segunda parte compete a los militares, puesto que ellos tienen los conocimientos profesionales para hacerlo. Aún así, el rediseño de fuerzas deberá ser aprobado por la sociedad, vía los canales legislativos pertinentes.

EL CORPORATIVISMO MILITAR

José Castro Sotomayor*

El Ecuador enfrenta una crisis política de gran magnitud. El cambio de mando presidencial puso en evidencia nuevamente la debilidad del sistema político y la posición dirimente de las fuerzas armadas. A partir del 20 de abril la clase política —empujada por la intensa presión de la sociedad civil— ha iniciado una discusión sobre la naturaleza de los tres poderes del Estado y su funcionamiento; los partidos políticos y su crisis de representatividad; la acefalía en las instituciones del Estado esenciales para el funcionamiento democrático (Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo) y las Fuerzas Armadas.

El Ministro de Defensa, Solón Espinosa, anunció un plan de modernización de las FFAA¹, elemento que amplía las perspectivas de discusión de la problemática militar en el país. Este tema ha sido descuidado por los responsables de la Política y por la misma institución armada, desinteresada en una necesaria autocritica. Sin embargo, esta intención puede ser coartada por una actitud autónoma de los militares, evidente en una arraigada "independencia orgánico-funcional en el desenvolvimiento de su vida institucional frente al Estado y a la sociedad política y civil"².

Concomitante a esta independencia, la institución militar ha fortalecido una posición corporativa que la ha llevado a desarrollar una "capacidad para definir desde sí misma, su rol y papel institucional frente al Estado, sus fines y misiones, su doctrina e ideología, su estructura orgánica y funcional y las modalidades de vinculación con el Estado y el sistema político en general"³, lo que podría dificultar un genuino proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas (por el momento, su Comandante ha indicado ciertas limitaciones a la participación

civil en este proceso; ver la cronología que se ofrece en este mismo boletín).

El corporativismo de la institución armada a pesar de su magnitud ha pasado desapercibido en el Ecuador, un país por sí mismo corporativizado. La corporativización se presenta como respuesta militar ante la ausencia de control civil que no ha podido colocar a las fuerzas armadas en el debido lugar que les corresponde desde el retorno a la democracia (1976-1979).

Desde este corporativismo cerrado, las fuerzas armadas han consolidado formas de funcionamiento para responder a las misiones "adquiridas" —que no responden a un interés profesional— y que han sido "delegadas tácitamente" por el mismo Estado. Esto ha tergiversado el contenido y propósito de la formación profesional militar, deshaciendo los parámetros de disciplina, con el consiguiente mal uso de los recursos. También ha potenciado la politización de sus actuaciones al contar entre una de sus misiones constitucionales la de "garantes del orden jurídico" (Art. 183), que en la práctica desemboca en la intervención directa de los militares en las distintas coyunturas políticas.

La autopercepción de los militares sobre su propia formación y misión, proviene del enclaustramiento en el que se han sumido en la última década y que no ha permitido una discusión profunda de los *elementos doctrinarios* que están detrás de estas posturas institucionales, que podemos decir, responden a planteamientos elaborados en el período de la Guerra Fría. En la práctica, esto ha traído consigo el estancamiento de cualquier proceso de reforma estructural en las FFAA, no solamente por la apatía del sector político y el hermetismo militar fundado en un mal entendido "espíritu de cuerpo", sino por aspectos de coyuntura que hacían de esta intención algo inadecuado (hasta 1998, el constante enfrentamiento frontero con el Perú).

Por estas razones, una real reestructuración de las fuerzas armadas debe iniciar por la revisión de los fundamentos conceptuales incluidos en la Constitución y de la posición que ocupan en la estructura institucional del Estado. En este proceso, el diálogo civil-militar es fundamental para elevar los planteamientos a reformas concretas en el marco jurídico (responsabilidad directa del Congreso), que eviten la politización de la

1. Los siete puntos fueron: 1. Actualización del marco legal; 2. Recuperación de la capacidad operativa; 3. Fortalecimientos del Sistema de Seguridad Social de FFAA; 4. Transparencia y justificación del gasto militar; 5. Reforma Administrativa; 6. Recuperación de la imagen institucional; 7. Incremento de las operaciones de paz en el marco de la ONU. (El Comercio 11/06/05)

2. VARAS, Augusto. *La Política de las Armas*. Citado por SAIN, Marcelo. *Los Levantamientos Carapintadas 1987-1991*. Centro Editor América Latina. Buenos Aires, Argentina. 1994.

3. *Idem*.

institución armada y fortalezcan su profesionalización al delimitar sus acciones a espacios enfocados a la defensa, que implica el uso de la fuerza militar para los objetivos del Estado frente a amenazas o agresiones externas.

Concebir el plan de modernización de las fuerzas armadas y su proceso desde esta perspectiva de discusión y crítica abierta y argumentada, encaminada a actualizar el marco legal de la institución, conducirá a otras reformas de carácter más específico, que posibiliten llegar a una transparencia del fun-

cionamiento militar y una afinación de sus operaciones a nivel internacional. La recuperación de la imagen institucional de las Fuerzas Armadas frente a la sociedad, será consecuencia normal de un proceso claro que rompa el celo mutuo entre civiles y militares, que tanto perjudicó a la institución militar y a la democracia ecuatoriana.

* Investigador Fundación Democracia, Seguridad y Defensa. Autor de: "Fuerzas Armadas, Autonomía y Desarrollo Corporativo. Un Análisis desde el Discurso de La Seguridad Nacional y el Desarrollo". Escuela De Sociología de la PUCE.

ALCANCE RESTRINGIDO DEL LIBRO BLANCO DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR

Pablo Celi*

El proceso del Libro Blanco, publicado bajo el título *Política de defensa nacional del Ecuador*, se produjo en una coyuntura en la que confluyeron factores de tipo social, político e institucional, que se habían venido gestando en diversos niveles de la relación civil-militar en el país: sus conflictos y desencuentros políticos; la proyección institucional de las Fuerzas Armadas en el escenario nacional y el debate sobre sus funciones y roles; las tensiones e incertidumbres generadas por la violencia vecinal y el impacto subregional del Plan Colombia; la evolución y extensión del debate hemisférico sobre seguridad y defensa.

A partir de las redefiniciones de la relación entre defensa y política exterior desde el fin del conflicto territorial con el Perú, las Fuerzas Armadas ecuatorianas debieron afrontar la perspectiva de su refuncionalización y redimensionamiento y la revisión de los componentes presupuestarios de la defensa nacional, en un proceso que demandaba de su relegitimación institucional, en medio de la obsolescencia de las concepciones y el marco legal de la seguridad nacional.

En este contexto, la convocatoria a la elaboración del Libro Blanco constituyó una iniciativa institucional del Ministerio de Defensa, incorporada a su *Planificación Estratégica 2010*, orientada a definir, a partir de un diálogo democrático a nivel social e institucional, la perspectiva estratégica de la defensa nacional, sus principios políticos, objetivos y dimensiones institucionales y su relación las tendencias de la transición en la seguridad regional y hemisférica.

Pero el amplio debate, anunciado en la convocatoria y fase inicial del proceso del Libro Blanco, fue en la práctica limitándose en su desarrollo y terminó restringido por dinámicas castrenses, atravesadas por las urgencias políticas del cambio de gobierno, que determinaron que su proyección sobre la formulación, implementación y ejercicio de una nueva política de defensa nacional, no haya pasado de establecer un marco referencial muy general, sin implicaciones efectivas para las acciones y decisiones en el sector.

En algunos aspectos, el Libro Blanco no superó los límites de las convocatorias al diálogo civil-militar precedentes: la ausencia de institucionalidad, el desentendimiento de los partidos y parlamentarios, la proliferación de opiniones civiles inorgánicas y desarticuladas de procesos sociales concretos, escasamente representativas de la diversidad de sectores, generada en una convocatoria parcial y recurrente, que no ha

logrado ampliar el diálogo hacia la totalidad de sectores sociales y, en muchos casos, a actores fundamentales.

Esta disfunción política del Libro no le ha permitido tener efectos directos y tangibles en el escenario político nacional ni proyectarse efectivamente como una orientación significativa para las acciones de seguridad y defensa ni para el desempeño de las Fuerzas Armadas, lo cual limitó su trascendencia política y social.

El apareamiento del Libro Blanco ha aportado muy poco a la formulación de la política de defensa y tampoco lo estableció como referente para una cultura de la defensa que desarrolle las relaciones sociales respecto de la seguridad y la defensa nacional.

Más allá de las expectativas sociales y políticas, el Libro Blanco ecuatoriano, finalmente resuelto en el ámbito militar, no logró dinamizar transformaciones significativas en sector defensa, sus contenidos declarativos no se articularon con reformas en el campo legal que permitan un nuevo posicionamiento social e institucional de la seguridad y la defensa, ni tuvo conexión con políticas ciertas ni con el curso de la actividad de defensa y la dinámica militar.

En el desarrollo de sus contenidos, las definiciones de política de defensa recogidas en el libro, con una escasa incorporación de criterios sociales, se encuentran poco sistematizadas.

En un texto genérico, se plantea la problemática de la seguridad sin una resolución conceptual ni política, amalgamando nociones tradicionales de seguridad nacional con algunos planteamientos nuevos, recreados en torno al debate hemisférico sobre seguridad y defensa. Las viejas nociones de defensa territorial aparecen confundidas con los postulados de la seguridad multidimensional y nuevos enfoques sistémicos de las denominadas "amenazas asimétricas", recogidos del debate internacional, sin llegar a determinar un contexto regional ni una definición correspondiente de amenazas auténticas, conservando la dicotomía propia de la doctrina de seguridad nacional entre amenazas internas y externas.

En cuanto a la institucionalidad de la seguridad, se reproducen las definiciones clásicas acerca de los roles y funciones de las Fuerzas Armadas, bajo el esquema presidencialista, sin establecer nuevos ámbitos institucionales para la estructuración del sector defensa, ni relación alguna con la esfera parlamentaria.

En relación con el desarrollo del sector de la defensa, tampoco ha sido significativa la proyección del libro en Fuerzas Armadas, que en algunos de niveles no le encuentran sustento ni funciones institucionales, por lo cual, en no existe una valoración unívoca sobre su trascendencia y sus alcances para la estructuración y conducción de la seguridad y la defensa nacional, de ahí su escaso impacto institucional.

Tras la elaboración del Libro Blanco se han mantenido bifurcadas las visiones y perspectivas civil y militar, entre actores que concurren a un encuentro ocasional poco transformador, que los deja inmóviles en sus posiciones y auto afirmados en perspectivas diferentes. Desde distintas orientaciones de interés se mantienen percepciones heterogéneas, e incluso contrapuestas, que se relacionan con opacidad, conservando, tras esta falta de transparencia, prejuicios estamentales y hábitos corporativos que reproducen la dualidad discursiva y política en la formulación y tratamiento de la problemática de la seguridad y la defensa.

A pesar de esta contracción de sus alcances, en una visión de perspectiva, lo más significativo del proceso del Libro Blanco en Ecuador, más que una amplia e integral renovación de contenidos, trascendente en la política de defensa nacional, tiene relación con la apertura de un debate social sobre una temática que se había mantenido lejana de los escenarios de opinión, restringida a los ámbitos institucionales del sector militar.

El apareamiento del Libro Blanco, llevó los temas de seguridad y defensa más allá de las limitadas temáticas del diálogo civil-militar, circunscritas a los problemas de presupuesto y control constitucional, hacia una discusión acerca de la determinación de la política de defensa como política pública. Esto coadyuva a la madurez del mencionado diálogo, insertándolo en una problemática política e institucional más amplia en su visión social y estratégica, para una reformulación de las concepciones sobre seguridad y defensa y un replanteo de sus procesos y dinámicas institucionales.

** Doctor en Filosofía; Lcdo. En Sociología. Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador.*

CRONOLOGÍA SOCIEDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA

Mayo-Junio de 2005.

1. PROTESTA DE ABRIL: EL ABUSO DE LA FUERZA

Una de las lecciones que dejó entrever la revuelta de los "forajidos" que, junto a los propios errores del gobierno, determinó la caída de Lucio Gutiérrez, es que la sociedad debe hacer una evaluación de sus instituciones de fuerza para saber su nivel de profesionalismo. La Policía Nacional enfrenta las secuelas de sus acciones contra las protestas en la ciudad de Quito. El despliegue de seguridad en los días de la caída de Gutiérrez (entre el 5 y el 20 de abril), según el Comandante de la Policía, José Vinueza, requirió la intervención de 23 unidades operativas con 5 459 policías (El Comercio 10/06/05). Los datos sobre la cantidad de bombas utilizadas no coinciden: la Defensoría del Pueblo dice 5 000 y la Policía sostiene que fueron 2000 (El Comercio 01/05/05).

¿Cómo se puede medir el abuso de la fuerza? Para los derechos humanos la contención de las manifestaciones fue una "represión brutal". La Policía dijo que su actuación fue incremental y que el uso de lacrimógenas no llegó a excesos. Argumentan que fueron utilizadas "por presión de los militares que dijeron que era una orden del Presidente". Para Gustavo Larrea, de la Asociación Latinoamericana de DDHH, el respeto a las órdenes no es una justificación ya que la Constitución respalda el derecho a la desobediencia en estos casos (El Comercio 01/05/05).

2. FUERZAS CONTRATADAS POR GUTIERREZ ACTUARON SOBRE LOS MANIFESTANTES

La Fiscalía de la Nación, abrió indagación penal sobre la participación, el 20 de abril, de personas contratadas por el régimen de Gutiérrez, que se apostaron en el edificio del Ministerio de Bienestar Social, contra los manifestantes quiteños. Hay indicios de que miembros de la policía actuaron en connivencia con ellos. Según el Art. 12 del Código Penal, si una persona no impide un acontecimiento, cuando tiene la obligación jurídica de hacerlo, "equivale a ocasionarlo" (El Comercio 03/05/05). A

nivel institucional, el Consejo de Generales decidió la salida del coronel Gerardo Zapata, acusado por organismos de derechos humanos de ser parte de la represión el 19 y 20 de abril (y también de la red de espionaje montada por Gutiérrez) (El Comercio 18/05/05). En su defensa señaló que sólo se limitó a presentar los escenarios al mando policial, ya que en esos días era subdirector de inteligencia (Hoy 13/05/05). El Alto Mando policial debe despejar algunas incógnitas; la principal ¿por qué actuó con tanta agresividad?, y ¿cuál fue la responsabilidad del Ministro de Gobierno? (Hoy 09/05/05). Las disculpas dadas por el nuevo comandante, Jorge Vinueza, revelan que no se actuó bajo los términos del respeto a los derechos humanos (El Comercio 07/05/05).

3. LOS HECHOS DE CIESPAL: CRÍTICA A LA FUERZA PÚBLICA

El Ministerio Público inició una investigación sobre los hechos del 20 de abril, por la desprotección al Presidente Alfredo Palacio por parte de la Policía y las FFAA. La fiscal Cecilia Armas, señaló que este sería un delito de omisión. A pesar del llamado del Presidente nombrado por el Congreso a la cúpula de las FFAA y la Policía, los uniformados no llegaron sino cuatro horas más tarde. El primer resultado fue la separación del coronel Sergio Samaniego, quien manifestó que no reconocía a Palacio (Expreso de Guayaquil 05/05/05). Es necesario establecer una comisión fuera de las FFAA y la Policía, ya que su espíritu de cuerpo obstaculizaría el esclarecimiento de los hechos de abril. Los temas relacionados con la seguridad están tipificados en la ley y existen sanciones para este tipo de actos. La justicia debe sancionar para alejar el desprestigio de ese poder (Hoy 02/06/05).

4. FUERZAS ARMADAS Y CRISIS POLÍTICA: NUEVAMENTE EL FANTASMA DE UNA DICTADURA MILITAR

La participación de FFAA en la caída de Lucio Gutiérrez ha abierto muchas incógnitas. Fuentes de Inteligencia Militar indicaron que la tarde del 22 de abril, al menos 12 oficiales se

reunieron en la Brigada BI-13 para debatir el destino que las FFAA darían a los acontecimientos de abril (El Comercio 26/05/05). Para ello se trazaron tres escenarios: el establecimiento de una dictadura militar, descartada porque no encontraron el ciudadano idóneo para ejercer ese cargo. Segundo, la toma del poder por parte del alto mando, fórmula inviable por la cercanía de los militares al régimen de Gutiérrez y por su enfrentamiento con la gente de Quito. El otro era el respaldo a Gutiérrez con la condición de que deshaga la Corte Suprema (que él mismo constituyó) y exilie a Abdalá Bucaram; pero las condiciones no permitieron tal opción. Lo curioso es que nunca se discutió la posibilidad de una sucesión constitucional, lo que explicaría la demora en la protección del Presidente Palacio en la CIESPAL el 20 de abril (Expreso de Guayaquil 27/06/05).

5. CÚPULA MILITAR HABRÍA FIRMADO ACUERDO DE RESPALDO A LUCIO GUTIERREZ, ANTES DE SU CAÍDA

El almirante Manuel Zapater, Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, negó la existencia del informe de inteligencia militar (Hoy 30/05/05). Al mismo tiempo, se conoció el documento firmado por la cúpula militar de la época de Gutiérrez —el jefe del Comando Conjunto, Víctor Rosero, y los Comandantes de Marina, Ejército y Aviación, Renán Sánchez, Luis Aguas y Luis Ayala— donde se señala que "apoyarán al gobierno en sus decisiones siempre que están dentro del marco constitucional [y] prometen mantener la unidad de mando del Comando Conjunto y no enfrentar las FFAA con el pueblo. Este documento firmado y notariado es una evidencia del apoyo de la cúpula militar al gobierno (Hoy 02/06/05). Para el diputado Guillermo Haro, quien difundió el documento, este juramento fue forjado con la finalidad de limpiar la imagen de la institución armada y de los jefes militares (Expreso de Guayaquil 02/06/05).

6. NUEVAMENTE LOS MILITARES SON ARBITROS DE LA POLÍTICA

El comunicado de las FFAA anunciando el retiro del apoyo a un gobierno, marca el antes y el después, una ruptura y vaciamientos de sentidos en la política. Se esperó ese pronunciamiento a pesar de que el Congreso ya había decidido dejar vacante el cargo de Presidente; pero con el anuncio de los militares, esta decisión se fortaleció (Hoy 03/05/05). Pero a las Fuerzas Armadas no les correspondía la decisión de "quitarle el apoyo al Presidente", como manifestó el Jefe del Comando Conjunto ¿Se puede imaginar una democracia donde se elige a los gobernantes en las urnas pero son los militares quienes deciden al final la permanencia de esa autoridad? Es absurdo (Hoy 01/06/05). Lo que tuvo que haber dicho el Jefe de las FFAA es que la convulsión social volvió inviable su continuidad en funciones (Hoy 02/05/05).

Estos hechos han develado un secreto a voces: que los militares han abandonado sus constitucionales propósitos para introducirse en los espacios reservados al orden civil. Así han acrecentado un poder que ya no es sólo militar sino económico y social (Hoy 31/05/05). La historia ecuatoriana, desde 1997, ha entrado en un círculo vicioso, donde los *impasses* producidos por los civiles han buscado solución en los militares, demostrando una gran irresponsabilidad de los políticos que ha interrumpido los procesos democráticos. Resulta claro que, mientras más activo se vuelve el papel de árbitro de las FFAA más irresponsables son los políticos. La imagen de que los militares son la única institución seria del país y columna vertebral del Estado, se ha creado desde la propia irresponsabilidad de los civiles (Hoy 21/06/05).

7. FUERZAS ARMADAS ABANDONARON AL PRESIDENTE PALACIO EN CIESPAL.

Si por su naturaleza las FFAA no son deliberantes, no es posible permitir que los hechos anteriores y posteriores a la caída de Gutiérrez queden sin aclarar (en especial el abandono en CIESPAL y el supuesto intento de golpe de Estado). El Ministro ha hablado de una revisión de los procedimientos empleados por las FFAA pero no se ha dicho nada de las sanciones que deben recibir quienes actuaron en contra de los fines de la institución (Expreso de Guayaquil 27/06/05). Si se desea que el sistema democrático se robustezca, es imperativo introducir reformas sustanciales que permitan resolver los conflictos de manera institucional, que los militares retornen a sus espacios propios y nunca más se introduzcan en los que no les compete (Hoy 03/05/05). Para ello es necesario redefinir el rol de las FFAA, sus leyes y reglamentos (Hoy 16/06/05). Los militares deben entender que sobre todo prima la Constitución y a ella deben regirse (El Comercio 24/05/05).

8. ESPIONAJE POLICIAL DURANTE EL GOBIERNO DE GUTIÉRREZ

El papel de la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI) no está claro. Creada en 1998 con el fin de entregar información a los grupos operativos para evitar y neutralizar delitos contra el gobierno, está en polémica cuando la Fiscalía evidenció que también se la utiliza para el espionaje de la oposición al gobierno, bajo la justificación de conspiración (El Comercio 11/05/05).

El general José Vinueza, Comandante de la Policía, quiere acabar con la percepción negativa de la Dirección General de Inteligencia (DGI) y aseguró que dismantelará, "si existe", la red de espionaje político en el país. Sostuvo que el caso del espionaje está siendo investigado por la Inspectoría de las Policía y la Fiscalía de Pichincha. (El Comercio 13/05/05). A pesar de la buenas intenciones, existen evidencias de que durante el gobierno de Gutiérrez se instalaron en la casa presidencial equipos de espionaje telefónico (que luego desaparecieron) (Hoy 17/05/05). Existe la grabación de una reunión del Consejo de Generales donde se escucha al Comandante reclamar al coronel Gerardo Zapata y al capitán Stalin Sacoto, por "anomalías extra profesionales" (El Comercio 26/05/05). Sin embargo, en su comparecencia ante el Congreso, Vinueza negó la posesión de los equipos de espionaje telefónico (El Comercio 10/06/05).

9. POLICÍA RETOMA EL PLAN ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN

Frente a este ambiente, la Policía desea recuperar la confianza de la ciudadanía, perdida por los últimos hechos de represión y espionaje. Para eso están retomando el plan estratégico de modernización de la institución y han empezado a ejecutarlo en campos como el tránsito, la educación de los oficiales de policía y la implementación de veedurías ciudadanas, para iniciar un proceso de rendición de cuentas, antes inexistente en la Policía (El Comercio 30/05/05).

10. FRONTERA NORTE

El ataque a Teteyé, ocurrido el 25 de junio, planificado y coordinado por el Frente 48 de las FARC, al Ejército colombiano, introdujo en la discusión entre Ecuador y Colombia sobre le tema fronterizo un nuevo elemento de tensión, cuando autoridades de ese país dijeron que la agresión se inició en territorio ecuatoriano. A partir de esta hecho, las posiciones de los dos países

en la negociación ha cambiado radicalmente, más si consideramos que a raíz del cambio de gobierno en Ecuador, la postura ecuatoriana de no intervención se ha consolidado.

a. **COLOMBIA PIDE AYUDA AL ECUADOR PARA ENFRENTAR A LA GUERRILLA FRENTE A NUEVA ESCALADA BELICISTA DE LAS FARC**

Las declaraciones de Jorge Eliécer Coral, alcalde de Puerto Asís, ciudad colombiana, en el sentido de que los guerrilleros se refugian en territorio ecuatoriano luego de atentar contra la vida de los colombianos, ha tensionado las relaciones en el cordón fronterizo. El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pedirá a su homólogo ecuatoriano ayuda para enfrentar a la guerrilla, puesto que considera que las FARC han "abusado del Ecuador" (Expreso de Guayaquil 28/06/05). De todas maneras, tal parece que el gobierno ecuatoriano todavía no conforma una política externa y por eso no la puede viabilizar en relación con Colombia ni con EEUU. La diplomacia debe tener un espectro más amplio para abordar los temas de las fumigaciones, los refugiados, la movilización de nuestra fuerza militar a la frontera, y no reducirse a la "no intervención" (Expreso de Guayaquil 29/06/05).

Por parte de Ecuador se cumplen los compromisos de vigilancia y de apoyo a los refugiados que llegan a nuestro territorio. Una elemental respuesta de reciprocidad impone al gobierno colombiano esta actitud (Hoy 12/06/05). Pero en el contexto actual, el único hecho real es que el enfriamiento de las relaciones diplomáticas coincide con el fortalecimiento de las acciones rebeldes en Colombia (El Comercio 28/06/05). Frente a esta nueva etapa belicista iniciada por las FARC, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso propuso al gobierno de Bogotá y Quito la formación de un comando militar conjunto contra la guerrilla en la frontera común, con el fin de impedir que los rebeldes utilicen la franja fronteriza para realizar sus ataques (El Comercio 30/06/05). Esta intención es rechazada por los pobladores de la zona cercana a los enfrentamientos, ya que sería involucrar más al Ecuador en el conflicto. Por esa razón la Junta de Acción Comunal de Puerto Nuevo, habla de una paralización de la zona con el apoyo a la red Amazónica que congrega a todas las provincias del cordón fronterizo y a la Federación de comunidades de la frontera (Fercofes), organismo integrado por 94 comunidades del río San Miguel (Expreso de Guayaquil 30/06/05). El Canciller fue enfático al decir que la postura de no intervenir se mantiene (Hoy 30/06/05).

b. **ACCIONES Y REACCIONES ESTRATÉGICAS**

La Fuerza Aérea Ecuatoriana reconoció que construirá una base para instalar un sistema de radar, en el sector de Zapallo (Esmeraldas), como una medida para mantener el control del espacio aéreo (Expreso de Guayaquil 07/06/05) y para mejorar las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Marina. Por el momento, 7 mil soldados continúan operando en el sector y 200 más se han trasladado a la frontera (Expreso de Guayaquil 08/06/05). Este flujo de efectivos ha aumentado a raíz de los últimos enfrentamientos entre el Ejército colombiano y la guerrilla, en las cercanías del río fronterizo San Miguel, en el sector de Putumayo, objetivo de la escalada militar del Plan Patriota (El Comercio 27/06/05).

c. **CANCILLERÍA RECHAZA ACUERDO DE INMUNIDAD DE SOLDADOS ESTADOUNIDENSES, A CAMBIO DE AYUDA MILITAR**

La entrega de los equipos de radar está condicionada a la firma del acuerdo que reconoce la inmunidad a los soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (artículo 98 de la CPI), condición que fue expuesta por Bantz Craddock, Jefe del Comando Sur de EEUU (El Comercio 21/06/05). La ayuda militar a Ecuador es \$70 millones anuales (Expreso de Guayaquil 21/06/05). Pero el Canciller Antonio Parra dijo que Ecuador respetará el Tratado de Roma (que crea la CPI) (Expreso de Guayaquil 22/06/05). La Embajadora de EEUU, Kiritie Kenney confirmó que EEUU suspenderá la ayuda militar por la negativa de Ecuador (El Comercio 30/06/05).

Analistas consideran que este condicionamiento violenta el derecho internacional, la Carta de la ONU que propicia la libre determinación de los pueblos, el principio de no intervención y el respeto a los derechos humanos, ya que puede traducirse en impunidad (Hoy 22/06/05) y quita a Ecuador toda jurisdicción en el juzgamiento de posibles delitos cometidos por ciudadanos de ese país (El Comercio 28/06/05).

d. **CAMBIO DE GOBIERNO Y REPLANTEAMIENTO DE LA RELACIÓN ECUADOR-COLOMBIA**

El Canciller Antonio Parra dijo que el gobierno retomará la propuesta presentada a Colombia para que las fumigaciones se realicen a 10 kilómetros de la frontera ecuatoriana, propuesta presentada por primer vez en 2002 (Hoy 17/05/05). Ecuador presentará un informe de Acción Ecológica y de organismos de derechos humanos elaborado en 2003 donde se afirma que el químico causa graves enfermedades a la piel y el daño en la estructura genética de pobladores de la frontera. Colombia se fundamenta en un informe emitido por la OEA donde se indica la inocuidad del químico; informe criticado por la Universidad Nacional de Colombia (Expreso de Guayaquil 23/06/05). Ecuador apelará al derecho internacional y a organismos internacionales de derechos humanos o la Organización Mundial de la Salud (El Comercio 24/06/05).

e. **ECUADOR EXIGIRÍA UNA VISA A LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS**

El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, indicó que los esfuerzos para controlar la línea fronteriza son mayores del lado ecuatoriano y exigió mayor presencia militar del lado colombiano (Hoy 24/06/05). El gobierno analiza la posibilidad de exigir visa a los ciudadanos colombianos (El Comercio 27/06/05). Esto se complementa con una nueva resolución migratoria en Carchi: los colombianos indocumentados deberán pagar una multa que va de 200 a 2000 dólares. La disposición es parte del proceso de regularización de los foráneos que realizan actividades productivas en el país (El Comercio 22/06/05). Por su parte la Canciller colombiana, Carolina Barco, considera que esta medida no solucionará el problema de la inseguridad y puede perjudicar las relaciones económicas de los dos países (El Comercio 28/06/05).

11. NUEVO MINISTRO DE DEFENSA PROPONE PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

La participación de los militares en política no es un hecho exclusivo de Ecuador. La propuesta al interior del Congreso de reformar el Art. 183 de la Constitución —donde se establece que los militares son los "garantes del ordenamiento jurídico"— y endurecer las sanciones para los militares que rompan el orden constituido se ha convertido en una necesidad a raíz de los acontecimientos que terminaron con la salida de Gutiérrez (El Comercio 08/06/05). Los analistas consideran que la Asamblea de 1998 dejó la puerta abierta para que las FFAA sean árbitros en momentos de crisis institucional (El Comercio 09/06/05).

El Ministro de Defensa, Solón Espinosa, anunció un Plan de Modernización de las FFAA con el fin de "generar procesos de solución a la problemática básica de la institución. Los siete puntos fueron: 1. Actualización del marco legal 2. Recuperación de la capacidad operativa 3. Fortalecimientos del Sistema de Seguridad Social de FFAA 4. Transparencia y justificación del gasto militar 5. Reforma Administrativa 6. Recuperación de la imagen institucional 7. Incremento de las operaciones de paz en el marco de la ONU (Hoy 11/06/05).

Los siete puntos planteados por el Ministro de Defensa, Solón Espinosa, tiene, según los analistas, un objetivo: devolver el prestigio cuando el diagnóstico institucional señala un fraccionamiento interno provocado por la participación de los militares en las crisis políticas desde 1997 (Hoy 18/06/05). El diputado Luis Fernando Torres admite que el llamado de algunos políticos a los militares ha producido su politización. Para Bertha García, el atributo de garantes de la constitución que tienen los militares en la Constitución proviene de una visión política del siglo XIX. Es necesario definir el papel y modelo militar y el modelo de defensa, ya que el actual responde a la época de la Guerra Fría y al escenario del conflicto fronterizo Ecuador-Perú, que terminó con el acuerdo de paz en 1998 (El Comercio 14/06/05).

12. ¿CUÁL SERÁ EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS FFAA?

El Alto Mando militar ha manifestado que los civiles tendrán espacio en este proceso, pero sus límites y alcances no están claros. La fase inicial es la socialización del proceso a nivel interno, previa al acercamiento a la sociedad civil que se dará a través de la participación de ministro y subsecretarios que participarán en mesas temáticas. El jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, Jorge Arroyo, aclaró que el diseño de las FFAA se lo hará al interior de la institución. La etapa de socialización terminará en septiembre (Hoy 19/06/05). Salvador Raza, catedrático brasileño, invitado por el Ministro de Defensa a dar una conferencia, señala que en la reestructuración de las FFAA el diálogo civil-militar es mandatario. En esta discusión se diseña y establece las tareas de los militares en relación con otros órganos del Estado, por eso este es un proceso de construcción política basada en la transparencia, en la confianza y en los principios que normativizan el juego de las interacciones políticas. Para no confundir las tareas se debe iniciar un proceso de discusión estratégico política que las determine en función de los recursos existentes y las capacidades de operación militar (Hoy 19/06/05).

Opiniones afirman que la profesionalización de las FFAA pasa por adecuarse a la Constitución y las misiones que esta les asigna, lo que pasa también por la crítica a la participación de FFAA en actividades productivas que no están vinculadas a la defensa (El Comercio 14/06/05). En este proceso, lo esencial es el nivel de comunicación que se de con otros sectores sobre el avance de la reestructuración, cuya propuesta debe estar planteada hasta el 2006. Recuperar el prestigio será resultado del éxito del proceso, en la medida que este sirva para reprofesionalizarse y reconstituir la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas (Hoy 18/06/05) (Expreso de Guayaquil 21/06/05).

CÚPULA DE LA FUERZA PÚBLICA

POLICÍA NACIONAL

FUNCIÓN ACTUAL	GRADO	NOMBRES Y APELLIDO
Ministro de Gobierno		Dr. Mauricio Gándara
Comandante General	General Inspector	Lic. José Vinuesa Jarrín
Jefe de Estado Mayor	General Inspector	Ec. Carlos Calahorrano Recalde
Inspector General	General de Distrito	An. Sist. Wilson Padilla Moscoso
Director General de Personal	General de Distrito	Dr. Carlos Heredia Amores
Director Nacional de la Policía Judicial	General de Distrito	Paco Terán Bustillos
Director Nacional Antinarcóticos	General de Distrito	Ángel Cisneros Galarza
Director Nacional de Operaciones	General de Distrito	Lic. Mario Morán Guillén

FUERZAS ARMADAS

Ministro de Defensa Nacional	General de División (r)	Oswaldo Jarrín Román
Jefe del Comando Conjunto	Vicealmirante	Manuel Zapater Ramos
Subsecretario General de Defensa	General de División	Néstor Vega Medina
Comandante General de la Fuerza Terrestre	General de División	Jorge Zurita Ríos
Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto	General de División	Nelson Enríquez Gómez
Comandante General de la Fuerza Aérea	Brigadier	Edmundo Baquero Madera
Comandante General de la Fuerza Naval	Contralmirante	Hector Holguín Darquea
Director de Operaciones del Comando Conjunto	General de Brigada	Miguel Ángel Maldonado

GASTO MILITAR MUNDIAL Y REGIONAL ESTIMADO, 1995-2004

(Cálculo en dólares. Tipo de cambio 2003)

Región	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variación 95-04
África	8,8	8,5	8,7	9,3	10,3	10,8	11	11,6	11,7	12,6	Más 43
Norte	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	4,3	4,4	4,8	4,9	5,5	Más 65
Sub- Sahara	5,5	5,5	5,0	5,5	6,3	6,5	6,6	6,8	6,8	7,1	Más 28
América	367	347	347	340	341	353	358	398	446	488	Más 33
Norte	347	328	326	319	320	332	335	375	424	466	Más 34
Centro	3,2	3,3	3,4	3,3	3,5	3,6	3,7	3,5	3,4	3,2	Más 2
Sur	17,2	15,6	18,1	17,4	17,0	17,9	19,9	19,6	18,4	18,8	Más 9
Asia, Oceanía	136	141	138	135	137	147	151	151	(158)	(164)	Más 21
Central	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5		0,6		0,6	0,7	Más 73
Este	113	119	115	111	112	121	124	123	129	132	Más 17
Sur	13,4	13,6	14,2	14,4	15,5	16,2	16,8	17,0	17,6	20,0	Más 50
Oceanía	8,7	8,6	8,8	9,1	9,6	9,5	9,9	10,3	10,6	11,0	Más 26
Europa	237	236	237	234	239	243	244	250	256	254	Más 7
Centro, Este	28,1	26,2	27,7	23,4	24,8	27,3	29,2	30,7	33,2	34,2	Más 22
Oeste	209	210	209	211	214	216	215	220	223	220	Más 5
Medio Oriente	40,1	39,1	43	46,5	46	51,7	55,3	59,2	54,4	56,1	Más 40
Mundial	789	772	774	765	773	806	819	864	927	975	Más 23
<i>Variación %</i>		-2,3	0,3	-1,2	1,1	4,2	1,6	5,4	7,2	5,3	

Datos en cursiva = Total basado en los datos del país calculados desde menos del 90% del total regional.

... = calculados desde menos del 60% del total regional.

Fuente: "Gasto Militar"

Elisabeth Sköns, Wuyi Omitoogun, Catalina Perdomo y Peter Stalenheim

Boletín RESDAL - Red de Seguridad Para América Latina. Junio, 2005.

SIPRI-Stockholm International Peace Research Institute. www.sipri.org



CON EL AUSPICIO DE:



BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Comité Editorial

Bertha García Gallegos
Fernando Bustamante Ponce
Francisco Rhon Dávila
Juan Pablo Aguilar Andrade

Asesoramiento Internacional

Dr. Louis Goodman - American University (USA)
Dr. Gustavo Suárez Perterra - Instituto Gutiérrez Mellado
(España)

Investigación

José Castro Sotomayor

Relaciones Públicas
Inés Cevallos Breilh

BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria
Universidad Católica. Torre 2, Piso 9, Oficina 901
Teléfonos: (593-2) 256 5627 ext. 1124

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec
<http://www.dsdpuce.org>

Correspondencia y solicitud de ejemplares del boletín:
jrcastro@puce.edu.ec